



## El FES y el frenteamplismo

Sectores del Socialismo Democrático suelen referirse —no sin cierta condescendencia— al inmenso “aprendizaje” realizado por los jóvenes frenteamplistas. Según ese discurso, la llegada al Gobierno habría llevado a dichos jóvenes a abandonar las posturas ideológicas radicalizadas y asumir una actitud de Estado y un pragmatismo que presidirían sus decisiones. Omite generalmente ese análisis un detalle: la estrepitosa derrota sufrida por el oficialismo con el rechazo al proyecto constitucional de la Convención, que los obligó a renunciar a sus ambiciones refundacionales (no debe olvidarse que el exministro Jackson llegó a definir esa nueva Constitución como requisito *sine qua non* para implementar el programa de Gabriel Boric). Pero más allá de tales precisiones, la presentación de la propuesta de nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior (FES) obliga a revisar la tesis del “aprendizaje”.

En efecto, la iniciativa retoma ideas que se remontan a los orígenes del frenteamplismo. Ya en 2013, el abogado Fernando Atria —uno de los ideólogos del sector— y la economista Claudia Sanhueza —actual subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales— publicaban un artículo en el que proponían la fórmula de un impuesto a los graduados como mecanismo de financiamiento estudiantil. La propuesta difería en varios aspectos del actual proyecto del

*El enfoque ideológico parece resistirse a los “aprendizajes”.*

Gobierno —de partida, se planteaba como el camino para sostener un sistema de gratuidad, que por entonces no existía para ningún decil de ingresos—, pero es evidente su similitud en un punto sustancial: el establecimiento de un modelo en que el costo total de la matrícula es asumido por el Estado (sin posibilidad de copago), a cambio de lo cual los egresados quedan obligados a pagar un tributo, independientemente de la cuantía del aporte recibido.

Se han advertido en estos días los problemas que esta fórmula involucra en términos de afectación de la autonomía de los planteles y de debilitamiento de proyectos académicos, así como el efecto de que algunos profesionales terminarían pagando varias veces los costos reales de sus carreras.

Atria y Sanhueza, sin embargo, fundamentaban su iniciativa en la idea de avanzar hacia un “régimen de lo público” en este ámbito, uno de los conceptos más acariciados por el frenteamplismo y que acompañó las protestas estudiantiles de principios de la década pasada, aquellas en que hicieron su estreno las principales figuras del sector. Algunos han querido ver —equivocadamente— similitudes entre este proyecto y el que impulsara el presidente Piñera. Mucho más evidente, sin embargo, es el vínculo entre esta iniciativa y un enfoque ideológico, al parecer, resistente a cualquier “aprendizaje”.